

4 de agosto de 2025 Técnico Judicial Daniel Mora Lobo Unidad de Inspección Fiscalía General de la República San José, Costa Rica

Estimado Técnico Judicial Mora Lobo,

**Asunto: Informe de Situación: Asunto del Departamento de Policía de Jacó,
Expediente N.º: 24-000196-0415-PE**

La presente comunicación tiene por objeto informar sobre el asunto del Departamento de Policía de Jacó, Expediente N.º: 24-000196-0415-PE, según lo solicitado tras la cita programada con el Coordinador Fiscal del Departamento de Policía de Jacó, Andrey Guerrero Fuentes, para el 3 de julio de 2025.

I. Introducción: Alegaciones de Actividad Criminal Este documento expone detalles sobre las acusaciones de una empresa criminal operando dentro del gobierno costarricense. Las alegaciones incluyen Delito Federal de Narcoterrorismo, Terrorismo Internacional, Obstrucción de la Justicia, Violaciones a los Derechos Humanos y una conspiración para asesinar al inversor estadounidense Enzo Vincenzi. Estas afirmaciones están sustentadas por registros públicos gubernamentales, que incluyen amenazas de muerte y evidencia de agresión. Esta evidencia está actualmente en posesión del Fiscal de Jacó, EDUARDO MORA CASCONTE, quien presuntamente está involucrado en estas actividades. El objetivo declarado es la detención de todos los funcionarios judiciales costarricenses implicados y su extradición a los Estados Unidos para ser juzgados por estos delitos.

II. Desafíos Críticos, Crisis, Desastres de Emergencia y Presunta Mala Conducta Oficial Enfrentados por el Sr. Enzo Vincenzi en Costa Rica El Sr. Enzo Vincenzi, un inversor estadounidense con compromisos financieros sustanciales y una búsqueda activa de residencia legal en Costa Rica, ha experimentado una serie de adversidades distintas y graves dentro de la nación. Estos incidentes críticos incluyen importantes inversiones personales y comerciales y esfuerzos continuos de residencia, el impacto de desastres naturales y presunta actividad criminal sistémica y malversación oficial.

A. Inversión Sustancial y Búsqueda Continua de Residencia Desde al menos 2022, el Sr. Vincenzi ha buscado la residencia legal en Costa Rica. Simultáneamente, ha realizado inversiones sustanciales que superan el \$1 millón de USD dentro del país. Este profundo compromiso financiero y personal subraya su profunda implicación y presencia en la nación, lo que lo hace particularmente vulnerable a los desafíos subsiguientes detallados aquí.

B. Impacto de Desastres Naturales En octubre de 2022, el Sr. Vincenzi experimentó el grave impacto de inundaciones generalizadas en Jacó y otras áreas costeras. Este evento, causado por fuertes lluvias y una onda tropical tras el Huracán Julia, resultó en aguas hasta el cuello que inundaron carreteras, estructuras y negocios. Los informes también indican la ocurrencia de un evento de inundación similar a finales de 2024, cuyos detalles precisos aún se están determinando.

C. Alegaciones de Actos Criminales Flagrantes y Malversación Oficial Más allá de las calamidades naturales, el Sr. Vincenzi alega que ha sido blanco de actos criminales flagrantes y malversación oficial sistémica. Estas graves acusaciones abarcan, entre otros:

- Múltiples amenazas contra su vida;
- Robo de propiedad personal y comercial;
- La imposición de cargos criminales sin fundamento;
- Obstrucción sistémica de la justicia por parte de funcionarios judiciales corruptos;
- Graves violaciones de sus derechos humanos;
- Actos criminales perpetrados por fiscales públicos corruptos;
- Instancias de narcoterrorismo; y
- Períodos de detención ilegal técnica.
- Privación de libertad

III. La Presunta Empresa Criminal y su Metodología El aspecto central de esta operación criminal es la presunta manipulación del sistema judicial costarricense por parte de un grupo de funcionarios públicos. Se afirma que el exjuez CELSO GAMBOA SÁNCHEZ, actualmente bajo arresto, dirigió esta operación criminal. Se le acusa de subvertir la totalidad del sistema de registros judiciales públicos del gobierno. Esto se habría logrado con la ayuda de fiscales públicos y oficiales de policía corruptos para efectuar la transferencia ilícita de fondos y bienes inmuebles de inversores de los Estados Unidos y ciudadanos costarricenses. El periodista de investigación Camilo Rodríguez ha informado sobre estas actividades, afirmando que ciudadanos costarricenses, incluido él mismo, fueron privados de sus propiedades y fincas a través de estos esquemas gubernamentales ilícitos organizados. Su informe está disponible aquí: <https://www.youtube.com/shorts/mivJG2MsA1A> Un modus operandi principal de esta empresa, presuntamente involucrada en Terrorismo Internacional y

Narcotráfico, fue iniciar sistemáticamente procesos penales fraudulentos alegando Violencia Doméstica contra individuos inocentes, particularmente inversores de los Estados Unidos con propiedades inmobiliarias y hoteleras en Costa Rica. Esta táctica sirvió como pretexto para establecer un registro público de criminalidad, facilitando así la posterior apropiación de sus activos. Este método fue empleado contra Enzo Vincenzi y otros inversores de los Estados Unidos. Las actividades ilícitas de esta presunta empresa criminal gubernamental representan uno de los casos más sustanciales de presunto Narcoterrorismo y apropiación de bienes inmuebles reportados dentro del gobierno costarricense, con los nombres de los abogados, oficiales de policía y funcionarios judiciales implicados identificados en los registros judiciales oficiales.

El periodista de investigación de medios de comunicación, Camilo Rodríguez, informó que Celso Gamboa Sánchez estaba ganando más de un millón de dólares mensuales para sobornar ilegalmente a un juez con tres millones de dólares. Según Rodríguez en YouTube, esta suma era insignificante para Celso Gamboa Sánchez, quien ha sido arrestado. Rodríguez afirma que Gamboa era hábil robando propiedades inmobiliarias a inversionistas de Estados Unidos y propietarios costarricenses, incluyendo fincas, negocios y residencias privadas. (Fuente: <https://www.youtube.com/shorts/Yus2L6z5fyo>)

Costa Rica está enfrentando su crisis de narcocorrupción más severa. La reciente detención de Celso Gamboa Sánchez, anteriormente ministro de seguridad de Costa Rica, y los detalles que surgen de su caso, han sacado a la luz pública la corrupción y los grupos de narcotráfico que operan dentro del gobierno. Esta situación podría representar el escándalo de drogas más importante en la historia del país.

Los detalles específicos de su caso también han arrojado luz sobre lo que se denomina "corrupción de terrorismo internacional", que implica el robo de propiedades inmobiliarias a inversionistas de Estados Unidos y ciudadanos costarricenses. Estos hallazgos sugieren una conexión entre las redes de narcotráfico, la participación gubernamental y el robo de bienes inmuebles. El caso apunta a complots para arrestos falsos, expulsión del país y asesinato tanto de inversionistas de Estados Unidos como de ciudadanos costarricenses en Costa Rica. Todo este asunto constituye un escándalo de drogas significativo y un caso importante de robo de propiedades inmobiliarias a inversionistas extranjeros y ciudadanos locales en la historia del país. (Fuente: <https://insightcrime.org/news/costa-rica-is-facing-its-worst-ever-narco-corruption-scandal>)

IV. Individuos Identificados Los siguientes funcionarios gubernamentales, abogados y oficiales de policía son nombrados en denuncias penales y están acusados de participar en esta conspiración. Sus presuntas acciones están evidenciadas en registros públicos, incluyendo una grabación de video de supuestos procedimientos judiciales fraudulentos accesible para revisión pública: <https://www.youtube.com/watch?v=Q-7Py0woFsM>

- **CELSE GAMBOA SÁNCHEZ:** Presunto cabecilla; exjuez, actualmente bajo arresto y enfrentando extradición a los Estados Unidos.
- **MICHAEL SOTO ROJAS:** Oficial de Policía del OIJ San José.
- **DONALDO BERMÚDEZ RODRÍGUEZ:** Oficial de Policía del OIJ Jacó.
- **YULIAN MASÍS AGUILAR:** Departamento de Protección de Testigos de Costa Rica.
- **CARLOS VILLEGAS MÉNDEZ:** Colegio de Abogados.
- **VIAMNEY GUZMÁN ALVARADO:** Colegio de Abogados.
- **FRANCISCO EITER CRUZ MARCHENA:** Presidente del Colegio de Abogados.
- **JOSÉ JUAN SÁNCHEZ CHAVARRÍA:** Abogado.
- **KARL VILLALOBOS HOFFMANN:** Abogado.
- **TOBÍAS MURILLO:** Alcalde de la Municipalidad de Jacó.
- **FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MADRIGAL:** Alcalde de la Municipalidad de Jacó.
- **DAVID RICARDO MADRIGAL:** Juez del Tribunal de Jacó.
- **SANDRA MORLAS:** Funcionaria Judicial del Tribunal de Jacó.
- **NORMA CAYASO:** Fiscal de Jacó.
- **EDUARDO MORA CASCONTE:** Fiscal Gubernamental de Jacó.
- **GLYNNE DAPHNE ROCHESTER:** Traductora de inglés/español de la Policía de Jacó y agente de bienes raíces.
- **YORLENI DÍAZ:** Abogada.
- **JUNIOR DÍAZ:** Presunta práctica no autorizada de la abogacía en relación con reclamos de seguros.
- **JUAN CALDERÓN DÍAZ:** Presunto co-conspirador; hijo de Yorleni Díaz.
- **ANDREA DÍAZ:** Presunta implicación como Abogada de Inmigración.

- CRAIG ANTHONY ATHERTON:** Presunto co-conspirador; Gerente de Inmigración.
- DAVID RICARDO MADRIGAL:** Juez del Tribunal de Jacó.
- SANDRA MORALES:** Funcionaria Judicial.
- YAMILETH DE LOS ÁNGELES ARAYA LARA (Mila):** Presunta implicación en fraude criminal.
- PATRICIA HERNÁNDEZ M.:** Fiscal Gubernamental.
- LUIS DIEGO CHAVES SOLÍS:** Abogado.
- MYRA CECILIA VILLALOBOS CHACÓN:**
- SONIA VILLALOBOS CHACÓN:** Presunta notaria pública fraudulenta; hermana de Myra Cecilia Villalobos Chacón.
- MÓNICA GABRIELA SÁNCHEZ VALVERDE:** Abogada, actualmente bajo arresto.
- JOSÉ ANTONIO CALDERÓN VARGAS:** Abogado, fallecido; presunta implicación en Narcoterrorismo.

V. Individuos Presuntamente Involucrados en Perjurio Se alega que los siguientes individuos han cometido perjurio tanto en los registros públicos de la Policía de Jacó como en los registros públicos de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:

- 1.JAIRO UREÑA VILLALOBOS (Celular: 109160793)
- 2.SONIA VILLALOBOS CHACÓN - Notaria Autorizada (Celular: 10487061)
- 3.SANDRA PATRICIA VARGAS MORALES (Celular: 880085098)
- 4.ANIA ARCE LEIVA (Celular: 601250409)

VI. Co-Conspiradores Nombrados (Estados Unidos y Costa Rica) Los registros judiciales del Gobierno de los Estados Unidos y los registros públicos de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, Florida, presuntamente implican a los siguientes individuos:

- CARMINE MARCENO:** Sheriff del Condado de Lee, Florida.
- RICHARD SEATON**
- CARLY HUBA**
- JAMES HUBA**

- MIRIAM PACHECO:** Presunta implicación como individuo indocumentado y en actividades fraudulentas.

- MARIA T. TORRES**

- MARVIN TORRES**

- BLANCA ROSA SACHTOURAS**

- JOHN SACHTOURAS**

VII. Base Probatoria Evidencia sustancial de estos presuntos actos criminales se encuentra en los registros públicos oficiales de múltiples entidades gubernamentales costarricenses. Estos instrumentos firmados, correspondencia oficial y materiales grabados residen en los registros de las siguientes entidades:

- La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
- La Sala Constitucional (Tribunal de Amparo)
- El Departamento de Policía de Jacó
- La Alcaldía Municipal de Jacó
- Los Tribunales de Puntarenas
- Las oficinas del OIJ de Jacó y del OIJ de San José
- El Registro Nacional de Costa Rica (incluyendo registros de gravámenes fraudulentos sobre bienes inmuebles)
- Registros del Banco BCR de Costa Rica, Banco Wells Fargo de EE. UU., registros gubernamentales generales y registros públicos de cuentas bancarias de los Tribunales de Puntarenas.

Evidencia adicional incluye correspondencia oficial de Melina Mora García, Secretaria y presunta co-conspiradora dentro de la Contraloría General de la República, mostrando un modus operandi similar al encontrado en la correspondencia oficial de Viamney Guzmán Alvarado, una abogada asociada con el supuestamente corrupto Colegio de Abogados. Estos registros incluyen denuncias penales y fotografías que muestran a un individuo fallecido, víctima de narcoterrorismo, presuntamente encontrado bajo su custodia.

También se hace referencia al "Caso Madre Patria", según lo reportado por Telediario.cr (<https://www.telediario.cr/en-alerta/caso-madre-patria-36-personas-detenidas-fraude>), en el

que treinta y cinco individuos fueron aprehendidos por el robo de propiedades inmobiliarias a ciudadanos extranjeros.

VIII. Demanda de Recuperación Financiera Inmediata Por medio de la presente se presenta una demanda formal al Fiscal Eduardo Mora Casconte, Jacó. Se le otorgan cinco (5) días para que se efectúe la devolución inmediata de \$35,000.00 USD. Estos fondos fueron tomados de mi cuenta bancaria de Wells Fargo en Florida, Estados Unidos, a través de las acciones de Yorleni Díaz, una abogada presuntamente involucrada en corrupción pública, y Cristian Eduardo Zamora Sequeira, un abogado asociado con ZAR Abogados, igualmente presuntamente involucrado en corrupción pública.

Estos fondos son necesarios de manera crítica para un procedimiento médico urgente para mí, gastos médicos veterinarios para mi compañero animal y la liquidación de impuestos de bienes inmuebles pendientes. El aspecto temporal de este asunto es crítico.

IX. Obstrucción Oficial y Acciones Relacionadas

A. Incumplimiento del Alcalde de la Municipalidad de Jacó en Proporcionar

Registros Hasta la fecha, Francisco José González Madrigal, Alcalde de la Municipalidad de Jacó, no ha suministrado los registros de impuestos sobre bienes inmuebles pertinentes a mis propiedades. Esta información, que indica el monto total adeudado, incluyendo multas e intereses acumulados, a junio de 2025, fue solicitada en tres ocasiones distintas por correo certificado. El Alcalde tampoco ha concedido una reunión oficial solicitada. Esta inacción se considera un acto adicional de obstrucción.

B. Reunión con el Coordinador Fiscal Fuentes y Presentación de Evidencia El 3 de julio de 2025, me reuní con el Coordinador Fiscal Andrey Guerrero Fuentes. Durante esta reunión, presenté registros judiciales públicos contundentes y registros públicos documentados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Jacó, Costa Rica. Estos documentos gubernamentales demuestran la apropiación fraudulenta y el robo de \$35,000.00 USD de mi cuenta bancaria de Wells Fargo ubicada en Florida, Estados Unidos. Adicionalmente, se presentó evidencia mediática documentada, que incluye una fotografía que muestra el cuerpo sin vida de un abogado, víctima de narcoterrorismo, hallado desnudo con tres heridas de bala en el maletero de su vehículo.

C. Respuesta del Coordinador y Énfasis en la Urgencia El Coordinador Fiscal Fuentes manifestó su intención de iniciar una investigación sobre la transferencia bancaria

fraudulenta. Me instruyó a comunicarme con él por correo electrónico el 10 de julio de 2025, para un informe completo sobre el estado de su investigación. Enfatizó la naturaleza urgente de este asunto, citando las lesiones graves y potencialmente mortales que sufrí a causa del ataque, agresión y conspiración para asesinar, según consta en el Expediente No.: 25-00017-0077-PE. Además, hice referencia a los conflictos de interés existentes, la apropiación ilícita de servicios legales, la explotación, la apropiación fraudulenta de \$35,000.00 USD de mi cuenta bancaria, y la conspiración para efectuar arresto falso, expulsión del país, robo y asesinato de inversores estadounidenses por sus propiedades inmobiliarias en Costa Rica.

D. Serias Preocupaciones Respecto a las Propiedades Inmobiliarias y la Seguridad

Personal Los inversores estadounidenses y yo mantenemos una seria aprehensión de que, a falta de la pronta devolución de estos fondos obtenidos fraudulentamente, Francisco José González Madrigal, el supuestamente corrupto Alcalde de la Municipalidad de Jacó, pueda intentar confiscar mis propiedades inmuebles, incluyendo propiedades de negocios hoteleros y mi residencia personal. Tal acción me dejaría sin refugio en Costa Rica, sin los medios para mi sustento o para la atención médica esencial relacionada con las lesiones del ataque, agresión y conspiración para asesinar, según consta en el Expediente No.: 25-00017-0077-PE. Estos presuntos crímenes, afirmo, fueron ocultados por el Departamento de Policía de Jacó en un intento previo de asesinarme y apoderarse de mi negocio hotelero y mi residencia personal en Costa Rica. Los inversores estadounidenses y yo consideramos que esta situación actual significa un intento renovado de infligir daño y apoderarse ilícitamente de mis activos.

X. Alegaciones de Corrupción Gubernamental Sistémica, Malversación Financiera, Obstrucción de la Justicia, Violaciones de Derechos Humanos y Actos Criminales Relacionados

El/La suscrito/a ha encontrado previamente una conducta ilícita similar que involucra al exalcalde Tobías Murillo, quien supuestamente se apropió indebidamente de activos inmobiliarios del Departamento de Impuestos Municipales y desvió ilícitamente las recaudaciones de impuestos municipales sobre bienes raíces. Registros públicos de Costa Rica y documentación oficial de ejecución hipotecaria de la Municipalidad de Jacó corroboran que las dos parcelas inmobiliarias del/de la suscrito/a fueron sometidas concurrentemente a procedimientos de ejecución hipotecaria. Durante este período, supuestamente se cobraron honorarios fraudulentos por abogados acusados de complicidad en estas acciones.

El/La suscrito/a ha sido previamente objeto de fraude, explotación y robo perpetrados por más de nueve individuos identificados como profesionales del derecho, incluyendo al Juez del Tribunal de Jacó, David Ricardo Madrigal. Estos individuos, junto con una presunta co-conspiradora, Yamilth De Los Ángeles Araya Lara (también conocida como "Mila"), están acusados de participar en una conspiración que involucra la falsificación de registros gubernamentales oficiales dentro del Departamento de Policía de Jacó y el sistema judicial. Estos registros fabricados incluían falsas acusaciones de violencia doméstica contra el/la suscrito/a.

Este presunto esquema, corroborado por registros gubernamentales, tenía como objetivo orquestar el asesinato, arresto injustificado y expulsión del/de la suscrito/a de Costa Rica. El propósito era permitir que estos funcionarios judiciales gubernamentales y profesionales del derecho confiscaran ilícitamente capital y activos inmobiliarios, incluyendo un establecimiento hotelero y una vivienda privada, pertenecientes a inversores estadounidenses. La intención era apropiarse ilícitamente de todo el capital comprometido por inversores estadounidenses en Costa Rica, fondos destinados a la promoción del turismo, la creación de empleo y la prosperidad económica para la población costarricense.

Adicionalmente, la Sra. Araya Lara supuestamente inutilizó las cámaras de vigilancia de seguridad del/de la suscrito/a y dañó e interrumpió intencionalmente la operación del hotel y el bienestar personal del/de la suscrito/a, dejando tanto al/a la suscrito/a como al hotel en una condición severamente deteriorada.

XI. Partes Identificadas y Conducta Indebida Asociada

El/La suscrito/a busca asistencia para inversores estadounidenses con respecto a pérdidas financieras documentadas y angustia psicológica severa, según lo corroboran los registros gubernamentales oficiales del Departamento de Policía de Jacó y los estados de cuenta del Banco Wells Fargo. Estas pérdidas y angustia son un resultado directo de las acciones de varios individuos, incluyendo, pero no limitado a:

•**Yorleni Díaz y Junior Díaz:** Supuestamente involucrados en la práctica no autorizada de la abogacía y acusados de apropiación indebida de fondos destinados a un reclamo de seguro de automóvil. Junior Díaz está adicionalmente acusado de aceptar el pago por un asiento de automóvil de Panamá pero no entregar el artículo y retener los fondos. También se le acusa

de haber tomado posesión ilícitamente de la residencia de su madre, perdiéndola posteriormente a través del juego en un casino.

•**Andrea Díaz y Craig Anthony Atherton:** La abogada de inmigración Andrea Díaz y el gerente Craig Anthony Atherton están igualmente acusados de apropiación indebida de los fondos del/de la suscrito/a y de actuar bajo un conflicto de interés en concierto con la abogada Yorleni Díaz.

•**Sonia Villalobos Chacón y Myra Cecilia Villalobos Chacón:** Presunta notaria licenciada fraudulenta y presunta criminal, acusadas de entrada y ocupación ilícita de propiedad privada sin un contrato de arrendamiento válido. Además, se les acusa de participar públicamente en calumnia y difamación contra el/la suscrito/a, con la presunta participación de reporteros de Jacó Garabito News Media, causando daño a la reputación y perjuicio financiero.

•**Tobías Murillo y Francisco José González Madrigal:** Exalcaldes.

•**Norma Cayaso y Patricia Hernández M.:** Abogada del Departamento de Policía de Jacó y abogada del gobierno, respectivamente.

•**Cristian Eduardo Zamora Sequeira:** Abogado del bufete de abogados ZAR Abogados.

•**José Juan Sánchez Chavarría, Karl Villalobos Hoffmann, Yulian Massis Aguilar, Luis Antonio Cubillo Pacheco y Viamney Guzmán Alvarado:** Abogados.

•**Francisco Eiter Cruz Marchena:** Presidente del Colegio de Abogados.

•**David Ricardo Madrigal y Sandra Morales:** Funcionarios judiciales del Tribunal de Jacó.

•**Mónica Gabriela Sánchez Valverde:** Abogada (arrestada).

•**José Antonio Calderón Vargas:** Abogado (fallecido, presunta implicación en narcoterrorismo), quien supuestamente emitió amenazas de muerte al/a la suscrito/a por un saldo pendiente. Está acusado de robo, tergiversación intencional y retiro ilícito de fondos de la cuenta bancaria de Wells Fargo del/de la suscrito/a en Estados Unidos. Supuestamente buscó orquestar el arresto del/de la suscrito/a por parte del Juez de la Corte Suprema de Costa Rica basándose en acusaciones criminales adicionales de violencia doméstica fabricadas.

•**Yamilth De Los Ángeles Araya Lara ("Mila"):** Identificada como presunta criminal, perpetradora de fraude, drogadicta e intrusa informática.

•**Myra Cecilia Villalobos Chacón:** Descrita como presunta criminal y perpetradora de fraude, acusada de ocupar ilícitamente la residencia del/de la suscrito/a sin un contrato de arrendamiento válido. Está acusada de allanamiento de propiedad privada, con la presunta complicidad de los medios de comunicación de Jacó, y de cometer públicamente calumnia severa, difamación y crímenes de odio discriminatorios contra el/la suscrito/a. Estas acciones incluyeron calumnia y difamación continuas, resultando en pérdidas financieras sustanciales y continuas para el/la suscrito/a y los inversores estadounidenses, como lo demuestra un cheque del Banco Wells Fargo actualmente en posesión del abogado fiscal del Departamento de Policía de Jacó, Eduardo Mora Casconte.

XII. Daños Resultantes, Violaciones de Derechos Humanos y Alegaciones de Terrorismo Internacional Contra Inversores Estadounidenses y Enzo Vincenzi

Los individuos antes mencionados, incluyendo al Abogado Fiscal Eduardo Mora Casconte, están implicados en presuntos actos que constituyen terrorismo internacional, corrupción gubernamental organizada, obstrucción de la justicia, manipulación de pruebas, violaciones de derechos humanos y la retención de \$35,000.00 USD de una cuenta bancaria de Wells Fargo en Florida, Estados Unidos.

Esta retención de fondos ha privado al/a la suscrito/a de los medios para adquirir sustento, para cubrir gastos médicos por lesiones incurridas durante una agresión pública documentada y presunta conspiración para cometer asesinato en una fecha específica, o para remitir los impuestos sobre bienes inmuebles de la Municipalidad de Jacó para la operación del hotel y la residencia privada.

Además, esta situación ha causado angustia mental y psicológica severa, dejando al/a la suscrito/a sin recursos financieros para el cuidado y mantenimiento de los perros del/de la suscrito/a. Esto constituye un acto grave de crueldad animal, sujeto a penas que incluyen multas y prisión de hasta tres años bajo la ley de Estados Unidos y Costa Rica.

A. ALEGACIONES DE MALA CONDUCTA, ABUSO DE PODER Y CONSPIRACIÓN

CRIMINAL Esta sección detalla serias alegaciones de corrupción institucional, abuso de poder y una conspiración criminal para cometer asesinato. Estas afirmaciones están dirigidas contra autoridades gubernamentales dentro de Costa Rica y el Sheriff Carmine Marceno del Condado de Lee, Florida. Las presuntas acciones abarcan coerción física y psicológica, indicativas de intención maliciosa.

Las afirmaciones incluyen, pero no se limitan a, los siguientes incidentes específicos y procedimientos judiciales:

- Solicitud de Asesinato por Encargo:** Una afirmación directa de solicitud de asesinato por encargo, identificada por el Caso No. 53-35825.
- Incidente del 10 de junio de 2019:** Un relato de una agresión violenta, un arresto ilegal y una conspiración para cometer asesinato, todo ocurrido el 10 de junio de 2019.
- Acción Judicial Relacionada:** Una contrademanda verificada presentada ante el Tribunal Judicial del 20º Circuito del Condado de Lee, referente a asuntos inmobiliarios, identificada como Caso No. 08-CA 007214. Esta contrademanda se presenta como conectada al patrón más amplio de presunta conducta indebida.

B. DEMANDA DE RESTITUCIÓN Y DECLARACIÓN DE AGRAVIOS El/La suscrito/a por la presente emite esta demanda formal para la devolución inmediata de Treinta y Cinco Mil y 00/100 Dólares Estadounidenses (\$35,000.00 USD). Esta suma fue obtenida y retirada ilícitamente de mi cuenta bancaria de Wells Fargo, ubicada en Florida, Estados Unidos. El monto total debe ser devuelto sin demora.

Esta demanda surge directamente de una agresión física severa, un ataque y una conspiración para cometer asesinato perpetrados contra mí el 31 de diciembre de 2024, según consta en el Expediente No. 25-00017-0077PE. Estos actos criminales causaron una fractura de hueso facial. Los individuos responsables de estos actos son Yorleni Díaz, una abogada acusada de corrupción pública, y Juan Calderón Díaz, su hijo y presunto co-conspirador.

C. Agravios y Daños Específicos Además, el/la suscrito/a ha recibido tres amenazas de muerte documentadas adicionales el 23 de mayo de 2025, a las 3:15 a.m.; el 23 de mayo de 2024, a las 3:29 a.m.; y el 25 de mayo de 2025, a las 11:16 a.m. Mi negocio hotelero y residencia personal han sido objeto de sabotaje, colocándome en una situación extremadamente peligrosa. Esta grave situación proviene directamente de las acciones de individuos específicos dentro del Departamento de Policía de Jacó, a saber, los abogados fiscales Norma Cayaso y Eduardo Mora Casconte. Ambos individuos enfrentan acusaciones de corrupción pública, obstrucción de la justicia, manipulación de registros públicos gubernamentales y pruebas, y crímenes de odio discriminatorios.

Se alega que estos individuos intencional y deliberadamente no han tomado las acciones policiales apropiadas. Además, se les acusa de haber manipulado el cheque bancario de Wells Fargo de \$35,000.00, lo cual constituye evidencia crítica en estos asuntos. Sus acciones han infligido angustia, sufrimiento y pérdidas financieras sustanciales sobre mí y otros inversores estadounidenses. Estas pérdidas se relacionan con mi negocio hotelero e incluyen daños estructurales a mi residencia y locales comerciales. Actualmente carezco de fondos para solucionar una fuga en el techo, y la demora en la justicia, que ha sido intencional y repetida, ha aumentado sustancialmente el costo de las reparaciones necesarias. Esta corrupción pública maliciosa intencional, deliberada y a sabiendas por parte de funcionarios judiciales y personal gubernamental ha coincidido con amenazas de muerte documentadas adicionales y amenazas de conspiración para asesinar a inversores estadounidenses en Costa Rica, específicamente apuntando a sus propiedades inmobiliarias, negocios hoteleros y hogares.

D. Acusaciones Contra Funcionarios Gubernamentales Nosotros, los inversores estadounidenses y yo, presentamos formalmente esta denuncia penal detallando presunto terrorismo internacional, obstrucción de la justicia, crimen gubernamental organizado por funcionarios judiciales, violaciones de derechos humanos, narcoterrorismo y crueldad animal. Esta denuncia también detalla acusaciones contra funcionarios judiciales gubernamentales públicamente corruptos que supuestamente están ayudando e incitando a la agresión, ataque, amenazas de muerte y conspiración para asesinar a inversores estadounidenses en Costa Rica. Estas alegaciones están documentadas en el Expediente No. 25-00017-0077-PE y el Expediente No. 24-000196-0645-PE. El Departamento de Policía de Jacó posee registros públicos grabados y evidencia pertinente a estos crímenes.

Esta evidencia y denuncia se están presentando a: Su Excelencia el Presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica, el Presidente de los Estados Unidos, las fuerzas militares de los Estados Unidos, las Investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, la Directora del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Kristi Noem, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Kash Patel, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la Embajadora de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica Melinda Hildebrand, el Gobernador del Estado de Florida Ron DeSantis, el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John

Radcliff, INTERPOL – La Organización Internacional de Policía Criminal, y varios medios de comunicación y reporteros de investigación.

Los inversores estadounidenses y yo expresamos una profunda falta de confianza en la integridad y las acciones del Abogado Fiscal del Departamento de Policía de Jacó Eduardo Mora Casconte, el Oficial de Policía del OIJ de Jacó Donaldó Bermúdez Rodríguez y el Oficial de Policía del OIJ de San José Michael Soto Rojas. Se alega que estos individuos están ayudando e incitando al terrorismo internacional, narcoterrorismo, obstrucción de la justicia, violaciones de derechos humanos, encubrimientos de asesinatos por narcoterrorismo y conspiración para asesinar a inversores estadounidenses en Costa Rica por sus propiedades inmobiliarias, negocios hoteleros y hogares.

E. Alegaciones de Corrupción Sistémica y Patrón de Mala Conducta El Departamento de Policía de Jacó de Costa Rica es objeto de serias alegaciones relativas a corrupción sistémica. Estas afirmaciones están supuestamente corroboradas por registros judiciales públicos gubernamentales, incluyendo un correo electrónico oficial fechado el 12 de marzo de 2025, del Oficial de Policía del OIJ de San José Michael Soto Rojas. Se alega que este correo electrónico confirma la implicación de altos funcionarios públicos gubernamentales y abogados en Costa Rica en el ocultamiento de homicidios relacionados con el narcotráfico, junto con actos de terrorismo internacional, corrupción pública gubernamental organizada y terrorismo financiero dirigido a inversores estadounidenses en Costa Rica. Las alegaciones específicas nombran al Oficial de Policía del OIJ de Jacó Donaldó Bermúdez Rodríguez y al Abogado Fiscal Eduardo Mora Casconte.

La evidencia citada por el/la suscrito/a incluye el presunto robo de \$35,000.00 USD de mi cuenta bancaria de Wells Fargo en Estados Unidos. Adicionalmente, se afirma que una fotografía de un individuo fallecido, supuestamente víctima de narcoterrorismo, está en posesión del Abogado Fiscal Eduardo Mora Casconte en el Departamento de Policía de Jacó. Estos presuntos actos se presentan como terrorismo internacional, narcoterrorismo, violaciones de derechos humanos y obstrucción de la justicia. Se afirma que estos funcionarios judiciales gubernamentales nombrados han empleado ilegítimamente el sistema judicial del Gobierno de Costa Rica, incluyendo el Departamento de Policía de Jacó y la Contraloría General de la República (Secretaria Melina Mora García y su mantenimiento de registros), lo que ha llevado a un profundo descrédito público.

El/La suscrito/a sostiene que la presunta mala conducta contra los inversores estadounidenses y contra mí exhibe un método de operación consistente. El/La suscrito/a declara que tácticas similares, incluyendo presunto arresto falso y conspiración para infligir daño, fueron supuestamente empleadas contra mí por el Sheriff Carmine Marceno del Condado de Lee, Florida, el 10 de junio de 2019. Este incidente público resultó en registros públicos documentados que reflejan presuntas violaciones de derechos, difamación y actos hostiles. Informo haberme reubicado en Costa Rica para reiniciar mi vida, solo para enfrentar una continuación de estos presuntos crímenes de terrorismo internacional, calumnia, difamación de carácter, crímenes de odio, arrestos falsos y conspiraciones en siete casos legales costarricenses documentados, incluyendo asuntos ante la Corte Suprema de Costa Rica y la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República está en posesión de registros públicos gubernamentales y evidencia grabada concerniente al cuerpo sin vida asesinado por narcoterrorismo.

El/La suscrito/a afirma que los registros públicos gubernamentales documentados tanto en Estados Unidos como en Costa Rica indican un esfuerzo coordinado por parte de altos funcionarios judiciales gubernamentales, abogados y oficiales de policía para atacar a individuos percibidos como una amenaza para operaciones ilícitas. Este presunto ataque, que el/la suscrito/a afirma que implica la privación de recursos financieros, libertad personal y vida, se describe como una empresa criminal de corrupción pública organizada de larga data. El/La suscrito/a afirma que estoy en una posición única para presentar y sustanciar estas alegaciones a través de registros públicos gubernamentales indiscutibles y testimonios de testigos.

DECLARACIÓN FORMAL Y EXIGENCIA DE REPATRIACIÓN DE FONDOS

Este documento, haciendo referencia a registros públicos relacionados con terrorismo internacional, constituye una exigencia formal para la repatriación inmediata de todos los fondos pertenecientes a Enzo Vincenzi y otros inversionistas estadounidenses que invirtieron capital en Costa Rica. El incumplimiento obligará a acciones legales basadas en graves acusaciones criminales contra funcionarios gubernamentales costarricenses específicos, funcionarios judiciales, fiscales públicos y personal policial, citando particularmente el Expediente No. 25-00017-0077-PE del Departamento de Policía de Jacó.

I. ACUSACIONES DE MALAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES Y CRIMINALIDAD

Eduardo Mora Casconte, Fiscal Público del Departamento de Policía de Jacó, es acusado de ayudar e instigar, a sabiendas, intencionalmente y deliberadamente, una conspiración para cometer asesinato. Este presunto comportamiento criminal ocurrió mientras él estaba en posesión de todos los registros judiciales públicos gubernamentales pertinentes relacionados con este asunto. Sus acciones, junto con las de la Fiscal Pública Yorleni Díaz y su hijo, Juan Calderón Díaz, son consideradas maliciosas y criminales.

Andrey Guerrero Fuentes, Coordinador Fiscal del Departamento de Policía de Jacó, se comprometió previamente a proporcionar una respuesta en el plazo de una semana con respecto al Expediente No. 24-000196-0645-PE. Cualquier retraso persistente en esta investigación, similar a las acciones del Fiscal Público Eduardo Mora Casconte, dará lugar a cargos legales igualmente graves. Por medio de la presente se deja constancia de que actos tales como la complicidad y encubrimiento en terrorismo internacional, narcoterrorismo, ocultamiento de asesinatos por narcoterrorismo, violaciones a los derechos humanos, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer asesinato contra inversionistas estadounidenses por sus propiedades inmobiliarias en Costa Rica, constituyen delitos federales graves sujetos a extradición internacional.

II. DECLARACIÓN DE PERJUICIOS Y EXIGENCIAS DE REPARACIÓN

Se presentarán pruebas adicionales, incluyendo documentación fotográfica de una fuga de agua en el techo del Hotel. En caso de que los fondos exigidos no sean repatriados sin demora, el Departamento de Policía de Jacó asumirá la plena responsabilidad legal por todos los daños estructurales, las pérdidas financieras sufridas y registradas que afectan el negocio del hotel y mi residencia personal, según lo evidencian los registros del Banco Wells Fargo de los Estados Unidos.

Esta reclamación por perjuicios incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

- Pronta devolución de \$35,000 por el cheque robado del Banco Wells Fargo.
- Todos los daños estructurales sufridos por el negocio del Hotel.
- Todas las pérdidas financieras sufridas por el negocio del Hotel y mi residencia.
- Todos los gastos médicos por angustia física y mental.
- Gastos varios, como un experto en internet y tecnología, y el costo de envío de correo certificado.

- Honorarios de representación legal.
- Gastos de investigación.
- Todos los honorarios médicos veterinarios.
- Todos los costos y honorarios judiciales incurridos tanto en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Florida como en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
- Todos los costos de transporte para la extradición de los funcionarios gubernamentales corruptos, funcionarios judiciales, fiscales públicos y personal policial específicamente identificados que han perpetrado estos actos ilícitos atroces contra inversionistas estadounidenses en Costa Rica.
- Daños por dolor y sufrimiento.
- Daños por violaciones a los derechos humanos.
- Daños por crímenes de odio.
- Privación de libertad técnica / Privación de libertad en Costa Rica.
- Como inversionista de más de \$1 millón de USD en Costa Rica, Enzo Vincenzi tiene derecho legítimo a una residencia válida en Costa Rica. Dos casos falsos de violencia doméstica contra el Sr. Vincenzi intentaron expulsarlo del país.
- Daños derivados de jueces y funcionarios judiciales obstructivos.
- Daños incurridos, incluyendo, pero no limitándose a, los casos y pruebas en el archivo ZIP de descarga.
- Justicia.

III. CONCLUSIÓN

Los Inversionistas de los Estados Unidos y yo extendemos nuestro agradecimiento al Técnico Judicial Daniel Mora Lobo por su integridad y ayuda brindada a nosotros. No obstante este reconocimiento, los hechos, tal como constan en los registros públicos gubernamentales, demuestran que las acciones de los mencionados funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales, fiscales públicos y personal policial del Departamento de Policía de Jacó han trascendido los límites legales. Por lo tanto, de conformidad con la ley, los inversionistas de los Estados Unidos insisten en la repatriación inmediata de todos los fondos malversados.

Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a Costa Rica.

Atentamente, Enzo Vincenzi Correo electrónico de contacto:

oceanbeachjacohotel3@gmail.com Correo electrónico de contacto:

oceanbeachjaco@gmail.com Dirección de contacto: Ocean Beach Jacó Hotel Residencial
Jacó Sol, Detrás de Plaza Coral

IV. NOTIFICACIÓN DE CONSPIRACIÓN CRIMINAL RELACIONADA Y PARTES INVOLUCRADAS

Esta declaración formal sirve también como notificación sobre una conspiración criminal más amplia que involucra al ex Juez corrupto de Narcoterrorismo Celso Gamboa Sánchez, actualmente bajo arresto, quien supuestamente dirigió una nefasta operación de terrorismo internacional. Esta operación supuestamente involucró al corrupto Gobierno de la Contraloría General de la República, con la co-conspiradora Melina Mora García, Secretaria de Gerencia, brindando ayuda y asistencia. Registros gubernamentales incriminatorios y pruebas de correos electrónicos gubernamentales, incluyendo un cheque estafado y robado del Banco Wells Fargo de los Estados Unidos por \$35,000.00 USD, 3 amenazas de muerte documentadas y una fotografía de una víctima de asesinato por narcoterrorismo, se encuentran, según se informa, en su posesión, demostrando su ayuda y asistencia en el asesinato de inversionistas estadounidenses en Costa Rica. Esto constituye un grave asunto público nacional de vida o muerte, como lo evidencian correos electrónicos gubernamentales documentados de la Contraloría General de la República del Gobierno de Costa Rica, fechados el miércoles 2 de julio, 12:40 PM.

Este documento registra además una verdaderamente horrenda corrupción pública organizada, estrés psicológico instrumentalizado y un sistema judicial gubernamental sistemático y amañado por funcionarios judiciales. Esta reprensible conspiración de terrorismo y narcoterrorismo de funcionarios judiciales internacionales para asesinar a inversionistas estadounidenses en Costa Rica representa una vergüenza pública nacional. El Juez corrupto de Narcoterrorismo Celso Gamboa Sánchez, arrestado, y el Oficial de Policía del OIJ Michael Soto Rojas, supuestamente han comprometido, corrompido e instrumentalizado ilegalmente todo el Departamento de Migración y Extranjería de Costa Rica y el Departamento de Policía del OIJ de San José, Costa Rica. Los co-conspiradores supuestamente incluyen al Oficial de Policía del OIJ Michael Soto Rojas, al co-conspirador

del Departamento de Policía del OIJ de Jacó, Oficial de Policía del OIJ Donaldo Bermúdez Rodríguez, al Fiscal del Departamento de Policía de Jacó, Eduardo Mora Casconte, al Juez del Departamento Judicial Público de Jacó, David Ricardo Madrigal, a la Funcionaria Judicial Sandra Morales, a los abogados corruptos Yorleni Díaz, a la abogada de Migración Andrea Díaz, a Cristian Eduardo Zamora Sequeira, a José Juan Sánchez Chavarría, al departamento de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria de la Municipalidad de Jacó, a los Alcaldes Tobías Murillo y Francisco José González Madrigal, y a otros funcionarios corruptos, abogados y testigos falsos identificados dentro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y todo el sistema de registros judiciales públicos gubernamentales de los Funcionarios Judiciales del Gobierno de Costa Rica, todos actuando en contra del Inversionista estadounidense Enzo Vincenzi y otros Inversionistas de los Estados Unidos en Costa Rica.

V. COPIAS ENVIADAS A:

A. Funcionarios del Gobierno de Costa Rica:

- Ministerio de Justicia (Hon. Mario Zamora Cordero)
- Despacho del Presidente de Costa Rica (Rodrigo Chaves)

B. Funcionarios y Agencias del Gobierno de los Estados Unidos:

- Secretario de Estado de EE. UU. (Sen. Marco Rubio)
- Embajada de EE. UU. en Costa Rica (Emb. Melinda Hildebrand)
- Departamento de Estado de EE. UU., Departamento de Investigación de Asuntos Exteriores
- Departamento de Justicia de EE. UU. (Dir. Pamela Bondi)
- Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (Dir. Kristi Noem)
- Oficina Federal de Investigaciones (Director Kash Patel)
- Administración de Control de Drogas de EE. UU.
- Agencia Central de Inteligencia (Dir. John Radcliff)
- Gobernador del Estado de Florida Ron DeSantis
- Subsecretario Adjunto de Defensa de EE. UU.
- Departamento de Inmigración de EE. UU.
- Fuerzas Militares de los Estados Unidos

- Embajada de EE. UU. (Washington, D.C.)
- Presidente de los Estados Unidos de América (Donald J. Trump)

C. Organismos Internacionales de Aplicación de la Ley:

- INTERPOL - La Organización Internacional de Policía Criminal y su Sede

D. Personal Legal y de Investigación:

- Investigador de FI/N.Y. Bob Nygaard
- Abogado de Nueva York Elliot S. Schessel
- Jueces Honorables Maureen Viquez Córdoba y Douglas Quesada

E. Otras Partes Notificadas:

- Inversionistas de los Estados Unidos
- Dr. Rodney Howard-Browne y Adonica Howard-Browne (rodneyhowardbrowne@yahoo.com)
- The River at Tampa Bay Church, 3738 River International Drive, Tampa, FL 33610 (866-85-RIVER)
- Failing Justice, Justin Carlson (contact@failingjustice.org)
- The Naples Press, Aisling Swift (info@naplespress.com)
- Medios de Comunicación y Reporteros de Investigación de Prensa (info@naplespress.com)
- Reporteros de NBC News Media: Kellie Burns, Peter Busch (dave.elias@hearst.com)
- Fox 4 News Media (news@fox4now.com)
- FOX35News@FOX.com
- Reporteros de ABC 7 SWFL News Media: Channing Frampton, Elyse Chengery (channing.frampton@gmail.com)
- Bob Norman, Reportero de Investigación (journalism@flcga.org)

Copias de cortesía para:

- Periodista y escritor de medios de comunicación Camilo Rodríguez
- Organizaciones contra la Crueldad y el Abuso Animal:
- Mundo Humanitario para los Animales
- En Costa Rica: Amanda Chaves, achaves@humaneworld.org, (506) 22 33 03 03

- En EE. UU.: Raúl Arce-Contreras, rcontreras@humaneworld.org, +1 (301) 721-6440
- Servicio Nacional de Salud Animal Costa Rica (SENASA) - Departamento de Crueldad y Abuso Animal
- Animal Rights Foundation of Florida, PO Box 39352, Fort Lauderdale, FL 33339, arff@arff.org
- La División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, info@dhr.ny.gov
- La Contraloría General de la República: Directora Marta Acosta Zúñiga y Secretaria Melina Mora García
- Coordinador Fiscal del Departamento de Policía de Jacó, Andrey Fuentes